



Detalles sobre la publicación, incluyendo instrucciones para autores e información para los usuarios en: <https://desafiosjuridicos.uanl.mx/index.php/ds>

Idalia Patricia Espinosa Leal (Universidad de Hankuk para Estudios Extranjeros)

Evolución legislativa del delito de cohecho en México. pp. 28-53

Fecha de publicación en línea: 31 de julio del 2021.

Publicado en Desafíos Jurídicos La Conjugación del Derecho. Todos los derechos reservados. Permisos y comentarios, por favor escribir al correo electrónico: desafios.juridicos@uanl.mx

Desafíos Jurídicos La Conjugación del Derecho. Revista de temas contemporáneos sobre derecho, y sus conexiones en la vida cotidiana, Volumen 1, No. 1, julio-diciembre de 2021, es una publicación semestral de la Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de la Facultad de Derecho y Criminología, editada en la Ciudad Universitaria, N.L., México. Con dirección en Cd. Universitaria, Av. De los Rectores s/n, San Nicolás de los Garza, N.L. C.P. 66451, Página electrónica de la revista: <https://desafiosjuridicos.uanl.mx/index.php/ds>

Editora en jefe: Dra. Amalia Guillén Gaytán Reserva de Derechos al

Uso Exclusivo del Título Volumen 1, No. 1, juliodiciembre de 2021 ISSN: en trámite ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Responsable de la última actualización de este número: Dra. Karina Soto Canales.

Desafíos Jurídicos La Conjugación del Derecho aborda temas contemporáneos sobre derecho, y sus conexiones en la vida cotidiana, tiene como propósito constituirse en un foro de discusión académica que aborda la compleja, contradictoria y multicausal relación entre el derecho y la vida social. Desafíos Jurídicos se inscribe en el debate académico nacional e internacional en el ámbito de Derecho y su giro especial en las ciencias sociales e invita al análisis de diversas prácticas sociales y formas de organización y acción política desde una perspectiva multidisciplinaria que ponga énfasis en la defensa de los derechos y su aplicación. Los textos publicados incorporan métodos y problemas tratados desde el derecho, la sociología, la ciencia política, la economía, los estudios urbanos, la geografía, los estudios culturales, la antropología, la literatura y el feminismo, entre otros. Las opiniones expresadas por los autores no reflejan la postura del comité editorial.

Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización expresa de la revista.

DIRECTORIO INSTITUCIONAL

RECTOR: ING. ROGELIO GARZA RIVERA CASTRO

SECRETARIO GENERAL: DR. SANTOS GUZMÁN LÓPEZ

DIRECTOR DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CRIMINOLOGÍA: MTRO. OSCAR P. LUGO SERRATO

REVISTA DESAFÍOS JURÍDICOS

DIRECTORA: Dra. Amalia Guillén Gaytán

COORDINADOR: Dr. Mario Alberto García Martínez

COORDINADORA DEL NÚMERO: Dra. Karina Soto Canales

ASISTENTE EDITORIAL: Mtra. Angélica Rubí Rodríguez Aguirre

ADMINISTRACIÓN DEL SITIO WEB: M.A. Daniel Vázquez Azamar

EDICIÓN TEXTUAL Y CORRECCIÓN DE ESTILO: María Alejandra Villagómez Sánchez

REDACCIÓN: Rosa María Elizondo Martínez

PINTURA DE LA PORTADA: José Luis Rodríguez Alemán "La Racionalidad del Derecho" © 2021

Evolución legislativa del delito de cohecho en México

Legislative evolution of Mexico's corruption offence in Mexico

Fecha de publicación en línea: 31 de julio del 2021

Por: Idalia Patricia Espinosa Leal*

*Universidad de Hankuk para Estudios Extranjeros

Resumen. El objetivo del presente trabajo consiste en mostrar las diferentes transiciones jurídicas del delito de cohecho desde la época precortesiana hasta nuestros días, para identificar qué era lo que se protegía y de qué manera. Asimismo analizar si durante las modificaciones a este delito, los legisladores tomaron alguna idea jurídica de las legislaciones de nuestros antepasados o bien, si hubo influencia de legislaciones extranjeras y en qué época. Para ello, con la vista puesta en el delito de cohecho, partiremos desde la revisión de usos y costumbres registradas en las leyes de Nezahualcōyotl, de la época precortesiana, pasando por las leyes de la Nueva España, para finalmente revisar las diversas modificaciones surgidas en el México independiente hasta nuestro sistema jurídico penal vigente. Se discutan la evolución de los castigos dentro de este contexto.

Palabras clave: Delito de cohecho; corrupción; soborno.

Abstract. The objective of this work is to show the different legal transitions of corruption offense from precortesian times to the present day, to identify what it was protecting and in what way. In addition, to examine whether and when the legislators took any legal insight into the laws of our ancestors or those of foreign influence during the amendments to this crime. To do this, with an eye on the crime of corruption, we start from the review of uses and customs recorded in the laws of Netzahualcoyotl, of the precortesian era, through the laws of New Spain, to see the various modifications that arose in independent Mexico to our current criminal judiciary and legal system. The evolution of punishments within this concept are discussed.

Keywords: Bribery offense; corruption; bribery.

INTRODUCCIÓN

La corrupción es un problema que siempre ha existido, son muchos los motivos para su comisión y se presenta en todas las áreas de la actividad humana; pero la figura básica de esta conducta delictiva es el delito de cohecho.

Para comprender el concepto del delito de cohecho recurriremos a varios autores clásicos así como lo que nuestro máximo tribunal entiende por este concepto. Carrara afirma que el cohecho consiste en la “venta que de un acto perteneciente a sus funciones y que por regla general debería ser gratuito, le hace un funcionario público a una persona privada”¹. Y por otra parte, Antón Oneca y Rodríguez Muñoz, definen al cohecho como “el hecho de aceptar el funcionario público una retribución no debida, entregada o prometida en consideración a actos de su oficio”².

Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación mexicana, menciona que los elementos constitutivos del delito de cohecho son los siguientes:

Tesis: COHECHO, ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL DELITO DE. “Primero. Intervención de una persona encargada de un servicio público. Segundo. Que ésta solicite por sí o por interpósita persona o reciba indebidamen-

te dinero o cualquier otra dádiva o acepte una promesa directa o indirectamente, para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto. Tercero. Que el acto u omisión estén relacionados con sus funciones, y Cuarto. Que la acción o la omisión se verifiquen precisamente por virtud del dinero o de la dádiva recibida de la promesa hecha”³.

Después de haber revisado el concepto dogmático del delito de cohecho, pasaremos a su análisis legislativo. Como veremos, la regulación del delito de cohecho se fue transformando de acuerdo con las necesidades de la época, quedando plasmadas las distintas derogaciones realizadas a esta figura delictual en el Código Penal, evidenciando las diferentes percepciones que sobre este concebía el legislador de su tiempo. Nuestro objetivo es revisar la regulación del delito de cohecho desde antes de la conquista hasta la actualidad, con un enfoque legislativo para desentrañar qué protege y cómo, cuál es el castigo aplicado, a quienes se aplica, para finalmente concluir si hay algún aspecto a mejorar.

ÉPOCA PRECORTESIANA

Durante el último siglo, antes de la conquista de los españoles a lo que hoy conocemos como México, el territorio era gobernado por la triple alianza política: los Aztecas de Tenochtitlán, los Tecpanecas de Tlacopan y los Alcohuas de Texcoco, la hegemonía del pueblo azteca en esta triple alianza, era por naturaleza guerrera, este pueblo tenía una sociedad

¹ Carrara, F., Programa de Derecho criminal. Parte especial, V. Quinto, 4ª Edición, Temis, Bogotá, 1993, p. 94.

² Antón Oneca/Rodríguez Muñoz, Derecho Penal, Madrid, t II, 1949, p. 214; asimismo, Etcheberry, Derecho Penal. Parte Especial, Ed. Jurídica de Chile, Santiago, 1998, t IV, 3ª Edición, p. 252.

³ COHECHO, ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL DELITO DE; [T]; Quinta Época; Primera Sala; SJF; Tomo CXXVIII; p. 449.

con estructura vertical, lo que condujo a una estratificación en clases sociales⁴.

Además, había toda una organización judicial, “los jueces administraban justicia con la mayor rectitud, todos llevaban en la cabeza una corona real, dando á (sic) entender que la justicia se administra en nombre del soberano, teniendo las sentencias tanta autoridad como si el rey las pronunciara”⁵

En esa época, los jueces recibían como parte de su paga prestaciones suficientes para que sólo se dedicaran a la aplicación de la justicia de aquella época, según la forma en que la entendían, porque:

“los jueces tenían señalado salario, tierras bastantes para sustentar una familia holgadamente, en las cuales había labradores que las sembraban dando cierta porción de las cosechas, suministrando además, agua, leña y servicios personales. Al morir los jueces, pasaban las tierras a sus sucesores en el cargo, no a su familia, con las gentes que las beneficiaban”⁶.

En la administración de justicia, contaban con un sistema de gravedad del delito para el efecto de la aplicación de la pena: **cuando los jueces recibían cohecho**, sin estar relacionado necesariamente al delito de sentenciar injustamente, **o se desmandaban en la bebida o cuando descuidaban sus obligaciones**, se procedía *de oficio* contra los jueces que se dejaban sobornar, en los casos leves eran los otros jueces quienes amonestaban ásperamente al culpable; y al reincidente, es decir, **si a la tercera amonestación no se enmendaba se le destituía de su cargo y además le trasquilaban el cabello** en público mercado, cosa de mucha afrenta. **Los casos graves se castigaban irremisiblemente con la muerte: degollados**⁷; Estas regulaciones regían hasta antes de la conquista y estaban expresadas en signos gráficos para representar ideas a menara de pinturas, porque la escritura como tal no existía en aquella época⁸. En este mismo sentido afirma Esquivel Obregón, que el derecho penal azteca, se representaba cada uno de los delitos y las penas mediante escenas pintadas⁹.

Según lo rescatado por los historiadores de los textos principales de las leyes aztecas: Las ochenta leyes de Nezahualcóyotl¹⁰, Leyes

⁴ Trinborn, Herman, El delito de las altas culturas de América, trad. del Alemán al Español, por José León Herrera y Ernesto More, Universidad Mayor de San Marcos, Lima, Perú, 1968, p.15-16. <https://catalog.hathitrust.org/Record/000600577>

⁵ Orozco y Berra, Manuel, Historia antigua de la conquista de México, Tomo Primero, Tipografía de Gonzalo A. Esteva, San Juan de Letrán No. 6, México, 1880, p. 268.

<http://www.cervantesvirtual.com/obra/historia-antigua-y-de-la-conquista-de-mexico-tomo-primero-846972/>

⁶ Ídem.

⁷ Veytia, Mariano, Historia antigua de México, Imprenta a cargo de Juan Ojeda, México, 1836, t III, p. 423, https://archive.org/details/historiaantiguad00veyt_0/page/422/mode/2up; Orozco y Berra, Manuel, op.cit., 5 ; Trinborn, Herman, op.cit., 4, pp. 756-757.

⁸ Orozco y Berra, Manuel, Historia antigua... op. cit., 5, p. 391.

⁹ Obregón, Esquivel, Apuntes para la Historia del Derecho en México, Edición polis, s.l.i., 1937, t I, p. 81 <http://biblio.upmx.mx/library/index.php/7487>

¹⁰ Alva Ixtlilxochitl, Fernando De, Historia Chichimeca, s.e.,

de los indios de Anáhuac¹¹, entre otras leyes consuetudinarias del Código de Mendocino¹², nos percatamos que al cotejar estos textos, la información es muy similar entre ellas, por lo que se constata que es verdadera. Entre estas similitudes encontramos que, en la mayoría de los castigos por cometer delitos graves, en general eran merecedores de la pena de muerte o reducción a esclavos, a algunos les aplicaban las penas hasta la cuarta generación, asimismo, perdían sus pertenencias en favor del ofendido, las penas impuestas eran muy severas, era un derecho penal ejemplar y seguramente por temor a sufrir tales castigos, las personas eran muy respetuosos de las leyes: “fueron los mexicanos muy leales y obedientes a sus reyes y no se haya que les hayan hecho traición”¹³.

Resulta comprensible que las conductas de los ciudadanos de esa época no fueran tan fre-

cuentes en la comisión del delito de cohecho, ya que el derecho penal era muy riguroso.

Por la forma en que los aztecas regulaban el delito de cohecho, se desprende que lo que pretendía proteger era que la administración de justicia se impartiera con eficacia y rapidez, porque se establecía pena para el juez que fuera cohechado o que descuidara su empleo, y por cometer delito grave de cohecho el castigo era irremediamente la muerte, este lineamiento iba dirigido para regular la conducta del juez dentro de sus funciones, no se contemplaba castigo para el particular que sobornara al juez. Esta conducta delictiva procedía de oficio y en contra de sentencias injustas producto del soborno del juez o bien, por descuidar sus obligaciones, es decir, porque el juez no hacía lo que debía de hacer, o por recibir cohecho.

ÉPOCA COLONIAL

Con la caída del Imperio Tenochtitlán, 13 de agosto de 1521, hubo muchos cambios en el territorio mexicano, dejando de tener vigencia las leyes penales consuetudinarias y las que estaban estampadas en los pergaminos que ilustraban la forma de juzgar de los aztecas.

Después de la conquista y hasta antes de la independencia de México, la regulación al delito de cohecho la regían las fuentes provenientes directamente de España, dejando para el recuerdo y sin fuerza de aplicación legal todo el derecho consuetudinarias de los aztecas, con todos sus avances en esta ciencia: la distinción entre delito doloso y culposos, las circunstancias atenuantes y agravantes de la pena, las excluyentes de responsabili-

México, 1892, Tomo II, pp. 187-193. http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/obras-historicas-de-don-fernando-de-alva-ixtlilxochitl-tomo-2/html/588554a4-a415-11e1-b1fb-00163ebf5e63_189.html

¹¹ Orozco y Berra, Manuel, op. cit., 5, pp. 269-275. ¹² Íbidem, pp. 275-277.

¹³ De Acosta, Joseph, Historia natural y moral de las Indias, en que se tratan las cosas notables del cielo, y elementos, metales, plantas y animales, de ellas: los ritos, ceremonias, leyes y gobiernos y guerras de los indios. Imperio de Sevilla, en casa de Juan de León, Sevilla, 1590, p. 440.

dad, la acumulación de sanciones, la reincidencia, el indulto y la amnistía¹⁴.

Durante el virreinato, rigieron las leyes penales de la Metrópoli, a pesar de la disposición del emperador Carlos V, en el sentido de respetar y conservar las leyes y costumbres de los aborígenes a menos que fueran contrarios a la fe y a la moral, cosa que no se dio y en general, la legislación aplicada en la Nueva España fue netamente española y entre las más relevantes se encuentran: Las ordenanzas reales de Castilla expedida en España en 1484, las Leyes de Toro, expedida en España en 1505, la Nueva Recopilación de 1567, la Novísima Recopilación de 1805 y las Siete Partidas, entre otras¹⁵; pero como estas regulaciones no concordaba con la situación económica ni social de la Nueva España fue necesario realizar un nuevo sistema jurídico para dicho territorio, de lo cual surgió el derecho indiano¹⁶.

Respecto al delito de cohecho, dentro las primeras obras del Derecho penal español moderno, aplicado tanto en España como en la Nueva España, se tutela el delito de cohecho de funcionarios públicos como de los particulares y el objeto tutelado en este delito es la integridad, la limpieza, la lealtad y la conciencia pública, así lo señala la Novísima recopilación de 1805, en los puntos 9 y 10 de la Ley IX (Observancia de las Leyes prohibitivas de

que los jueces y oficiales de justicia reciban dádivas y regalos), en el Título I (De los jueces ordinarios), del Libro XI, (De los juicios civiles, ordinarios y ejecutivos), se consideraban como intereses tutelados en el cohecho pasivo, la integridad y la limpieza de los funcionarios o jueces, estableciendo lo siguiente:

“9. La recta administración de justicia es inseparable de la integridad y limpieza de los jueces; por cuyo motivo les está prohibido tan seria y repetidamente en las leyes el recibir dones ni regalos de cualquiera naturaleza que sean, de los que tuvieren pleito ante ellos, o probablemente pudieren tenerle, aunque no lo tengan en la actualidad: por tanto se recomienda con toda especialidad a los corregidores la puntual observancia de este capítulo; en la inteligencia de que no se les disimulará nada en esta parte, y los contraventores serán irremisiblemente castigados, probado que sea el delito, con privación de oficio, inhabilitándolos perpetuamente para ejercer ninguno otro que tenga administración de justicia, y en volver el cuatro tanto de lo que hubieren recibido”¹⁷.

También, se preveía la existencia del delito de cohecho cometido a través de otras personas en nombre del servidor público; cosa que imposibilitaba ejercer sus funciones de forma íntegra y pura, y se establecía de la siguiente manera, en el punto 10 del citado ordenamiento:

¹⁴ Obregón, Esquivel, op.cit., 9, pp. 82-85.

¹⁵ Castellanos, Fernando, Lineamientos elementales de Derecho Penal, Editorial Porrúa, México, 2004, p. 43-44.

¹⁶ Nava Garcés, Alberto Enrique, 200 años de justicia penal en México, Primera parte 1810-1910, Primeras leyes penales, UNAM, México, 2019, p. 345. <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4074/12.pdf>

¹⁷ Boletín Oficial, Novísima Recopilación, Mandada formar por el señor Don Carlos IV, Madrid, 1805. https://www.boe.es/biblioteca_juridica/publicacion.php?id=PUB-LH-1993-63&tipo=L&modo=2

“10. De poco serviría que los jueces procediesen por sí con integridad y pureza en la administración de justicia, si indirectamente se dejasen cohechar por medio de sus familiares y dependientes: en cuyo concepto serán responsables los corregidores, como si por sí mismos recibiesen dones y regalos prohibidos, é incurrirán las mismas penas, siempre que se les probare que por malicia, o misión o condescendencia permitan que los reciban sus mujeres, hijos y demás familias y domésticos. Por la misma razón deberán celar también con el mayor cuidado que los oficiales de justicia, dependientes de su tribunal, procedan con la misma integridad y pureza, castigándolos en caso de contravención con las mismas penas impuestas por las leyes; y estarán siempre a la mira de que las justicias de su distrito se porten como corresponde en esta parte, amonestándolas si no lo ejecutasen; y no bastando, darán cuenta con justificación al Tribunal superior correspondiente”¹⁸.

De la anterior legislación podemos encontrar una rigurosa regulación en cuanto a la conducta del funcionario público de no recibir cohecho ni directa ni indirectamente, con la intención de proteger la integridad de la función de la Administración Pública, es decir, que la idea del legislador era que el funcionario estuviera libre de compromiso o de deuda proveniente de la aceptación de cualquier tipo de obsequio, razón por la que estaba prohibido que aceptaran regalos, y así pudieran juzgar de forma íntegra; y en cuanto a las penas el castigo es grave, puesto que de comprobarse

el cohecho del funcionario perdía su empleo de manera perpetua y además debía entregar el soborno recibido.

MÉXICO INDEPENDIENTE

El pensamiento que predominaba antes de la independencia de México, partía de la idea de que el corrupto siempre era el particular y el corrompido siempre tenía que ser el funcionario; por lo que se reservó la expresión de cohecho activo **para aludir a la conducta del particular que realiza el delito**, que en este entonces se le consideraba así únicamente al ciudadano quien corrompía al funcionario público; y la expresión cohecho pasivo se dejaba para referirse a la conducta del funcionario público que se deja corromper por el ciudadano¹⁹.

Esa es la razón por la cual a partir desde ese entonces y hasta nuestros días se utiliza la expresión cohecho activo para referirse al particular que comete este delito y cohecho pasivo para referirse al funcionario público que comete cohecho, pero ahora se acepta que también el funcionario público puede solicitar soborno al particular para realizar alguna conducta ilícita.

Posterior a la Independencia de México, seguían vigentes las leyes penales españolas, pero a partir del 28 de abril de 1835, se promulga el primer Código Penal para el Estado de Veracruz, este ordenamiento tomó sus bases del Código Penal español de 1822²⁰.

¹⁸ Ídem.

¹⁹ Labatut, Glenda, Derecho penal, Ed. Jurídica de Chile, Santiago, 2000, t II, 7ª edición, p. 90.

²⁰ Nava Garcés, Alberto Enrique, 200 años de justicia penal... op. cit., 16, p.349.

La tipificación del delito de cohecho, en el sistema jurídico del México independiente, en materia federal, ha transitado por diversos cuerpos normativos, por lo que aquí se verán los aspectos evolutivos del delito de cohecho, desde el Código Penal de 1871 hasta el del año de 1931 porque es el código que continúa vigente, para posteriormente ir analizando las diversas reformas hasta llegar a la actual tipificación del delito de cohecho.

CÓDIGO PENAL DE 1871 (CÓDIGO MARTÍNEZ DE CASTRO)

Sin lugar a dudas, este código, forma parte del inicio de la evolución histórica del delito de cohecho en el México independiente. De conformidad con la exposición de motivos del Código Penal de 1871, donse se deja de manifiesto que en ese entonces era necesario formular una legislación penal porque no se contaba con una que fuera *a doc* con las necesidades del momento, y que los ciudadanos estaban:

“enteramente entregados a la discreción y prudencia de los jueces, que se hallaban en la dura alternativa de aplicar leyes bárbaras ó desautorizadas por su inobservancia, ó de imponer penas arbitrarias, como llevaban tiempo haciéndolo, con total infracción al artículo 14 de la Constitución federal, en que se manda expresamente que nadie sea juzgado ni sentenciado si no por leyes exactamente aplicadas al hecho de que se le acusa”²¹.

²¹ Editor Miramontes, Donato. Exposición de motivos del Código Penal de 1871. En: Código Penal para el Distrito Federal y el Territorio de la Baja California sobre delitos del Fuero común y para toda la República Mexicana sobre delitos

Recordemos que el presidente de la República mexicana de esa época era Benito Juárez y con él inicia la restauración de la República en 1867, siendo que el país había atravesado por un período de guerras de intervenciones extranjeras contra: España, Francia, Inglaterra y Estados Unidos, entre los años 1825 a 1867; con estos datos podemos imaginar la tragedia que se vivía en el país, posteriormente, vuelto el país a la normalidad republicana, los trabajos de la Comisión redactora del Código Penal quedaron designados el 28 de septiembre de 1868²²; y al frente Don Antonio Martínez de Castro como presidente de dicha comisión, Manuel Zamacona, José María Lafragua, Eulalio María Ortega como miembros de la misma y de Indalecio Sánchez Gavito como secretario²³.

El Código Penal fue aprobado y promulgado el 7 de diciembre de 1871 y entró en vigor el 1° de diciembre de 1872 en el Distrito Federal y en el Territorio de Baja California, sobre delitos del fuero común y para toda la República sobre delito contra la federación; conocido bajo el nombre de Código de Martínez de Castro, pues este ilustre jurista presidió la comisión que elaboró su proyecto. El Código se componía de 1152 artículos referentes a delitos y faltas, divididos en cuatro libros y, éstos a su vez, en títulos y luego en capítulos. Al final llevaba añadida una Ley Transitoria sobre procedimiento penal en 28 artículos.

contra la Federación. 1883, p. 70. <http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1020013105/1020013105.PDF>

²² *Ibidem*, p. 8.

²³ Porte Petit Candaudap, Celestino, Apuntamientos de la parte general de derecho penal I, Porrúa, México, 1989, 20a. ed., pp.43-6.

Este código, consideró en el Libro Tercero, Título Undécimo a los “Delitos de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones” y estableció algunos lineamientos, los cuales se reflejan a continuación: Capítulo I. Anticipación o prolongación de funciones públicas. Ejercicio de las que no competen a un funcionario. Abandono de comisión, cargo o empleo. Capítulo II. Abuso de autoridad. Capítulo III. Coalición de funcionarios. **Capítulo IV. Cohecho.** Capítulo V. Peculado y concusión. Capítulo VI. Delitos cometidos en materia penal y civil. Capítulo VII. Sobre algunos delitos de los altos funcionarios de la Federación.

Se estableció en el Código penal de 1871, en el Libro Tercero, Título undécimo: “Delitos de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones”, Capítulo IV. Cohecho, los delitos de cohecho, sus artículos a la letra decían:

“Artículo 1014. Toda persona encargada de un servicio público, sea ó no funcionario, que acepte ofrecimientos ó promesas, ó reciba dones ó regalos, ó cualquiera remuneración, por ejecutar un acto justo de sus funciones que no tenga retribución señalada en la ley, sera castigado con suspensión de empleo de tres meses a un año, y una multa igual al duplo de lo que reciba.

Artículo 1015. El cohechado por ejecutar un acto injusto, ó por dejar de hacer otro justo, propio de sus funciones, será castigado con la pena de tres meses de arresto á dos años de prisión, multa igual al duplo del cohecho, y suspensión de empleo dé tres meses á un año, sin perjuicio de lo prevenido en la fracción única

del artículo 148, si el acto ó la omision no hubieren llegado á verificarse. En caso contrario, sufrirá de uno á tres años de prisión, pagará la multa susodicha, y será destituido de su empleo ó cargo, é **inhabilitado perpetuamente** para obtener otro en el mismo ramo.

Artículo 1016. Lo prevenido en el artículo anterior, se entiende del caso en que el culpable acepte el cohecho por ejecutar un acto injusto que no sea en sí delito. Si lo fuere, se aplicarán las penas de que se habla al fin del artículo anterior, por la sola aceptación del cohecho, y cuando el delito llegare á ejecutarse, se observarán las reglas de acumulación.

Artículo 1017. En todo caso en que el cohecho consista en ofrecimientos, promesas, ó cosas que no sean estimables en dinero, en lugar de las multas de que hablan los artículos anteriores, se impondrá una de segunda clase.

Artículo 1018. Se tendrán como circunstancias agravantes de cuarta clase: I. Ser el cohechado juez, jurado, asesor, árbitro, arbitrador ó perito. II. Que el cohecho se verifique á instancia del cohechado.

ART. 1019. No se librará de las penas del cohecho el que lo reciba por medio de otro, ni el que, por faltar á sus deberes, estipule que se dé alguna cosa, ó se preste un servicio á otra persona.

Artículo 1020. El que por un acto ejecutado en desempeño de funciones públicas, reciba de la persona interesada en

dicho acto, o de otra en su nombre, un presente, regalo ó agasajo, será castigado con extrañamiento y una multa igual al duplo de lo recibido.

Artículo 1021. En todos los casos de los artículos anteriores, caerá en comiso lo que haya recibido el cohechado, y se aplicará al fondo de indemnizaciones.

Artículo 1022. El corruptor, en los casos de que hablan los artículos que preceden, sufrirá por regla general, las mismas penas del cohechado, ménos las de suspensión de empleo, é inhabilitación.

Artículo 1023. Se exceptúa de lo prevenido en el artículo anterior, el caso en que la pretensión del corruptor sea justa, y haya hecho el soborno á instancia del cohechado. Entonces solo se le impondrá una multa igual al monto del cohecho.

Artículo 1024. La tentativa del cohecho se castigará con la pena de ocho dias á seis meses de arresto, y multa de 100 á 1,000 pesos.

Artículo 1025. Las personas que intervengan en el cohecho á nombre del corruptor ó del cohechado, serán castigados como cómplices”²⁴.

La comisión redactora del Código Penal de 1871, también conocido como Código Martínez de Castro, tomó las bases del código penal español de 1870 que, a su vez se inspiró

en sus antecesores de 1850 y 1848. Además, se basó en la doctrina de Ortolán para la Parte General (Libros I y II) y en Chauveau y Hélie para la Parte Especial, Libro III²⁵, lugar en donde se ubica al delito de cohecho.

Como mencionó el redactor del Código, que para el apartado de los delitos, y entre ellos el de cohecho, tomó en cuenta las teorías de Chauveau y Hélie, señalando que para su codificación se basó en la ofensa grave que los actos provocan como consecuencia en el reposo de la sociedad, esa era la ideología del legislador en México.

Mientras, en la sociedad alemana surgía la idea del bien jurídico, término acuñado por Birnbaum, allá se discutía sobre este tema como concepto de protección de los delitos; pero de esto no hay mención en la exposición de motivos del Código penal analizado, esto significa que en esa época, no se contemplaba la idea del bien jurídico en nuestro sistema de justicia penal, pero sí tenían un objetivo para la legislación de los delitos, se basaban en aquellos actos que al mismo tiempo eran contrarios a la justicia moral y a la conservación de la sociedad para considerarlos y tipificarlos, mientras que todos aquellos actos que, aunque envolvieran una muy grave ofensa a la moral y no perturbaran el reposo público, no deberían ser delitos, sino cuando ofendieran el pudor, cuando causaran escándalo, o se ejecutaran por medio de la violencia. Entonces, según el legislador, si había razón para castigar a quie-

²⁴ Editor Miramontes, Donato, Exposición de motivos..., op. cit. 21, pp. 226-28.

²⁵ Carrancá y Trujillo, Raúl, Martínez de Castro y el Código Penal de 1871, Escuela Nacional de Jurisprudencia, 1942, p.215.

nes realizaban actos delictuosos, porque entendía que había un agravio a las personas, y porque ofendían a la sociedad.

Además, continúa explicando Martínez de Castro, en la exposición de motivos, que era preciso no perder de vista el doble objeto que el legislador se proponía, a saber: que las penas fueran correccionales y ejemplares al mismo tiempo, pero dando la preferencia a esta segunda circunstancia, de que jamás debe prescindirse; porque según él la corrección moral no puede obrar sino sobre el individuo, y el ejemplo obra en toda la masa de la sociedad; y porque no siempre se logra la enmienda del delincuente, pero siempre puede conseguirse la intimidación, si las penas son proporcionadas a los delitos; y para que lo sean, deben imponerse tomando en cuenta la gravedad del daño que aquellos causen.

Por otra parte, el legislador consideró al daño como una de las bases de la penalidad; sosteniendo que en todo delito hay dos violaciones, y por consiguiente dos elementos que lo forman; la violación de un deber que tiene el delincuente, y la violación de un derecho del ofendido; y si la primera es invariable, supuesta la intención de su autor, la segunda aumenta en gravedad, tanto como aumenta el perjuicio que se infiere²⁶.

También, en la exposición de motivos se hace referencia a los delitos de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, en específico sobre el delito de cohecho, recordemos que anteriormente a la existencia del código que se analiza, se tenía la idea equivocada

de que el funcionario público no podía ser corruptor, sólo el particular era el corrupto, por lo que Martínez de Castro consideró que en esa época era necesario que las autoridades estuvieran rodeadas del prestigio y del respeto de los ciudadanos, justificando la aplicación de las penas a estos delitos, pudiendo ser el sujeto activo un funcionario así como un particular, además sostenía que era conveniente aplicar el mismo rigor de la ley a los particulares en cuanto a la represión de los delitos que los servidores públicos cometían contra los particulares, sin observarse la suspensión de puesto, ya que no aplica en ellos.

Martínez de Castro, tenía claro que no sólo por el hecho de ser servidor públicos, había que confiarse únicamente de su honor y su virtud, ni considerarlos incapaces de cometer corrupción. Sin embargo, no dudaba en que la garantía principal de una buena administración de justicia debía buscarse, no en el temor del castigo, sino en las virtudes de los magistrados y jueces, en su rectitud, en su ciencia, en su independencia de carácter, en su prudencia, energía y desinterés. Admitía que “si éstos carecían de dichas dotes, para conferirles sus puestos, entonces deberían ser removidos de ellos a toda hora y por cualquier motivo, porque de lo contrario habría magistrados y jueces que en vez de ser los custodios de la sociedad, la tendrían en continua zozobra”²⁷.

En general, los fundamentos en que se apoya la redacción del cuerpo del proyecto del Código penal de 1871, fueron los Códigos Penales de Francia, de Bélgica de 1867, el Proyecto de Código de Portugal de 1864, el Código Penal

²⁶ Editor Miramontes, Donato, Exposición de motivos... op. cit., 21, pp. 42-5.

²⁷ Íbidem, pp. 63-65.

Portugués de 1852, el Código de la Luisiana, el Código de Baviera de 1813 (Alemania), el de Prusia de 1851, el Código Penal Español de 1848, la Novísima Recopilación de 1805, el Código Civil de Veracruz, el Código Civil Español, las ideas de Mittermaier (en su artículo sobre el duelo, inserto bajo el número XVIII de la obra *Revue des revues de droits*, 1838), Renazzi (*Elementa iuris criminalis*), Julio Claro (*Praxis*), Ortolan, Rossi, Chaveau y Hélie, Bentham, Laboulaye, Tocqueville y Beaumont, León Vidal, Boneville, Merlin y Sourdat²⁸. Como se puede ver en la elaboración de este código fue notable la influencia extranjera, aun cuando la Comisión redactora se esforzó por hacerlo lo más adecuado para el pueblo mexicano.

Ideológicamente, el Código Penal de 1871 se inspiró en la corriente doctrinaria del clasicismo penal. De acuerdo a los fundamentos doctrinales, el Código Penal combina las teorías de la justicia absoluta y la de la utilidad social; respecto a la responsabilidad penal, admite el libre albedrío. Establece atenuantes y agravantes de la pena, y algunas disposiciones correccionales.

Entre las instituciones importantes que incluye este código penal, está la figura del delito intentado, llamado actualmente tentativa, en el cual se siguen todas las etapas del hecho delictivo, pero la consumación no se presenta por tratarse de un hecho imposible, o porque

se emplean métodos y medios inadecuados para lograr el resultado; y se habla del delito frustrado y del conato.

Se hace también mención de la libertad preparatoria, concedida a los reos que presentan buena conducta, con la posibilidad de revocarla, o de confirmarla con la libertad definitiva. Estas instituciones, se anticiparon a la pena indeterminada y a la condena condicional, posteriormente consagradas por las legislaciones contemporáneas.

La expedición de un Código Penal exigía la emisión de un código instrumental sobre la materia, puesto que:

“...sin uno, el otro pierde su razón de ser: sin el Derecho procesal las disposiciones normativas se convierten inmediatamente en letra muerta, porque no hay posibilidad de que los particulares puedan excitar la maquinaria judicial (o administrativa) correspondiente para exigir el respeto de sus derechos; en tanto que sin derecho sustantivo, tampoco tiene razón de ser el derecho procesal, se convierte en un formalismo absolutamente hueco”²⁹.

Fue en el año de 1880, cuando se promulgó el primer Código de Procedimientos Penales mexicano, descrito como monumento de orgullo nacional por lo avanzado de sus principios, la bondad de su método y su dicción clara y correcta; contemplaba el cuerpo del delito, la búsqueda y aportación de pruebas, además de contemplar derechos del acusa-

28 Cruz Barney, Óscar, “Influencias del código penal de Martínez de Castro en la codificación penal mexicana, Reforma judicial”, Revista mexicana de justicia, número 17, s.f., p. 109. <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:HRCgzeeTT9wJ:https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/reforma-judicial/article/download/8789/10840+&c-d=2&hl=en&ct=clnk&gl=kr>

29 Cuenca Dardón, Carlos E., Manual de Derecho Procesal penal, Porrúa, México, 2015, p. 15.

do previstos desde la Constitución liberal de 1857³⁰.

En 1894, se promulga un nuevo Código de Procedimientos Penales³¹, que mantiene gran parte de los postulados teóricos del anterior, pero introduce disposiciones orientadas a nivelar la situación del Ministerio Público frente a la defensa. Un tercer Código Federal de Procedimientos Penales, aún bajo la vigencia del Código Penal de 1871, fue publicado el 18 de diciembre de 1908³².

Es importante mencionar que el Código Martínez de Castro fue derogado por el Código Penal de 2 de septiembre de 1929, en vigor desde el 15 de diciembre del mismo año y derogado a su vez por el hoy vigente, de 14 de agosto de 1931.

CÓDIGO PENAL DE 1929 (CÓDIGO DE ALMARAZ)

En 1903, el gobierno de Porfirio Díaz encabezó una comisión que tenía por objeto revisar

el Código penal de 1871; su proyecto fue entregado hasta el año de 1912, y por las evidentes vicisitudes derivadas del movimiento revolucionario no fue aprobado. Las modificaciones contempladas en el proyecto, se limitaban meramente a adaptar algunos principios del Código, retocar otros, o eliminar aquellos obsoletos.

Concluida la violenta etapa revolucionaria, y tras la emisión de una nueva Carta Magna, la Constitución de 1917, la necesidad de nuevas instituciones se reflejó en el ámbito del Derecho Penal, haciéndose patente una vez más la exigencia de crear una nueva legislación punitiva.

Fue hasta el año de 1925, cuando el Presidente en aquel entonces, Plutarco Elías Calles, designó una nueva comisión que se encargase de la revisión del anterior código penal y la elaboración de uno más acorde a las necesidades sociales del país. La comisión redactora, que se integró, estuvo formada por José Almaraz, Enrique Gudiño, Ignacio Ramírez Arriaga, Manuel Ramos Estrada y Antonio Ramos Pedrueza. Los trabajos de la comisión terminaron en 1929; el Presidente Emilio Portes Gil promulgó el Código Penal el 30 de septiembre de 1929, el cual entró en vigor el 15 de diciembre del mismo año. El código de 1929 es conocido comúnmente como Código Almaraz, por ser dicho autor uno de los principales redactores. Este ordenamiento jurídico inició como la primera codificación postrevolucionaria³³.

³⁰ Baranda, Joaquín, "Memoria que en cumplimiento del precepto constitucional presenta al Congreso de la Unión el C. Lic. Joaquín Baranda Secretario de Estado y del despacho de Justicia e Instrucción Pública, 1887, 31 de marzo", en: Soberanes Fernández, José Luis, Memorias de la Secretaría de Justicia, UNAM, 1997, p. 379. <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:TLXXt9s52qQJ:https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/2/546/1.pdf+&c-d=1&hl=en&ct=clnk&gl=kr>

³¹ Edición del Boletín Judicial, Imprenta y Litografía, Código de Procedimientos Penales del Distrito y Territorios Federales, México, 1894.

³² Edición Oficial, Imprenta de Antonio Enríquez, Código Federal de Procedimientos Penales, México, 1908.

³³ Speckman Guerra, Elisa, La justicia penal en el siglo XIX y las primeras décadas del XX, Los Legisladores y sus propuestas, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, México, 2013, p. 433.

En este Código, los delitos que implican a funcionarios públicos, estaban regulados en el Libro Tercero, Título Noveno “De los Delitos cometidos por funcionarios públicos”, a través de los siguientes: Capítulo I. De la anticipación o prolongación de funciones. Del ejercicio de las que no competen a un funcionario. Del abandono de comisión, cargo o empleo; Capítulo II. Del abuso de autoridad; Capítulo III. De la coalición de servidores públicos; Capítulo **IV. Del cohecho**; y Capítulo V. De los delitos cometidos por los altos funcionarios de la Federación. La regulación del delito de cohecho de este código penal se encuentra en los artículos siguientes:

“ARTÍCULO 582. Toda persona encargada de un servicio público, sea o no funcionario, que acepte ofrecimiento o promesa, o reciba dones o regalos, será destituido de su empleo, pagará una multa igual al duplo de lo que reciba y quedará inhabilitado o cinco años para cualquier empleo en la administración pública.

ARTÍCULO 583. Al cohechado por ejecutar un acto injusto o por dejar de hacer otro justo, propio de sus funciones, si el acto o la omisión no hubiere llegado a verificarse, se le aplicarán de tres meses de arresto a dos años de segregación, pagará una multa igual al duplo de la cantidad dada u ofrecida por el cohechador y será destituido del empleo. Si el acto u omisión se llevaren a cabo, además de la multa requerida y de la destitución de empleo

*o cargo, se aplicará: segregación de uno a tres años e **inhabilitación por veinte años** para obtener otro empleo.*

ARTÍCULO 584. Lo prevenido en el artículo anterior se aplicará al caso en que el culpable acepte el cohecho por ejecutar un acto injusto que no sea en sí delito. Si lo fuere, se aplicarán las sanciones de que se habla al final del artículo anterior, por la sola aceptación del cohecho, y las reglas de acumulación.

ARTÍCULO 585. En todo caso en que el cohecho consista en ofrecimientos, promesas o cosas que no sean estimables en dinero, en lugar de las multas de que hablan los artículos anteriores, se impondrá una de quince a treinta días de utilidad.

ARTÍCULO 586. Se tendrán como circunstancias agravantes de cuarta clase:
I. Ser el cohechado funcionario judicial, jurado, asesor, árbitro, arbitrador o perito, y
II. Que el cohecho se verifique a instancias del cohechado.

ARTÍCULO 587. No se liberará de las sanciones del cohecho, el que, por interpósita persona, reciba lo prometido ni el que por faltar a sus deberes estipule que se dé alguna cosa o se preste un servicio a otra persona.

ARTÍCULO 588. El que, por un acto ejecutado en el desempeño de funciones públicas, reciba de la persona interesada en dicho acto, o de otra en su nombre, un

presente, regalo o agasajo, pagará una multa igual al duplo de lo recibido.

ARTÍCULO 589. Al cohechador, en los casos de que hablan los artículos que preceden, no se le aplicará sanción alguna, salvo cuando el cohechado no admita y denuncie el delito; entonces se aplicará al primero la sanción que correspondería al cohechado.

ARTÍCULO 590. Cuando la petición del cohechador sea justa, sólo se le hará una amonestación.

ARTÍCULO 591. A las personas que intervengan en el cohecho a nombre del corruptor o de cohechado, se les aplicará la mitad de la sanción que corresponda a estos. Mas si denunciaren al cohecho antes de que se pronuncie sentencia, no se les aplicará sanción alguna.

ARTÍCULO 592. En todos los casos de los artículos anteriores caerá en comiso lo que hubiere recibido el cohechado, y se remitirá al Consejo Supremo de Defensa y Prevención Social para aumentar el fondo de indemnizaciones”³⁴.

Este Código Penal, tuvo una vigencia muy corta y la regulación del delito de cohecho fue muy similar a la anterior co-

dificación; según los propios autores del Código, el ordenamiento **responde a los postulados de la escuela positivista**. Es uno de los primeros cuerpos de leyes que inicia la lucha consciente contra el delito a base de defensa social e individualización de sanciones. De acuerdo con la inspiración positivista, la responsabilidad penal se basó en la responsabilidad social, misma que sin embargo, no fue establecida adecuadamente por los legisladores, al grado que la misma se contradice y opone a otros principios incluidos dentro del mismo texto legal. Por otra parte, se critica este código en su contenido general, porque tenía graves defectos de redacción, numerosas repeticiones y contradicciones por lo que no permitía su correcta aplicación³⁵.

CÓDIGO PENAL DE 1931

En virtud de los defectos que presentaba el Código Penal de 1929, el Presidente Emilio Portes Gil nombró una nueva Comisión para la elaboración de un tercer Código Penal, que fue promulgado el 14 de agosto de 1931, por el Presidente Pascual Ortiz Rubio y puesto en vigor el día 17 de septiembre del mismo año.

Este último ordenamiento, es el que actualmente sigue vigente en materia penal federal. Han existido diversos anteproyectos posteriores al del año 1931, pero no han tenido éxito en su promulgación: 1948, 1958, 1963 y 1984.

³⁴ Diario Oficial, Código Penal para el Distrito y Territorios Federales, Órgano de Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Sección Tercera, Poder ejecutivo, Secretaría de Gobernación, México, D.F. 1929, pp. 138-9.

https://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?cod_diario=186990&pagina=1&seccion=3

³⁵ Indicador Político, Breve historia de la codificación penal en México, 2011. <http://www.indicadorpolitico.mx/?p=4595>

La Comisión redactora del Código Penal de 1931 se conformó por: José Ángel Ceniceros, José López Lira, Alfonso Teja Zabre, Luis Garrido y Ernesto Garza. Como no fue publicada la exposición de motivos, podemos recurrir a las bases generales las cuales se localizan en las Actas de la Secretaría de la Comisión Redactora, consistentes en:

*“a) Aplicación del arbitrio judicial hasta los límites constitucionales; b) Disminución del casuismo; c) **Simplificación de sanciones**; d) Efectividad de la reparación del daño; e) Simplificación del procedimiento; f) Organización del trabajo de los presos; g) **Establecimiento de un sistema de responsabilidades, fácilmente exigibles, a los funcionarios que violen la ley. Es el complemento indispensable del arbitrio judicial**; h) Dejar a los niños completamente al margen de la función penal represiva, sujetos a una política tutelar y educativa, e i) Completar la función de las sanciones, por medio de la readaptación a la vida social de los infractores”³⁶.*

Como veremos más adelante, estos lineamientos fueron aplicados en la regulación del delito

de cohecho, pero a nuestro juicio, desprotege jurídicamente a la Administración Pública.

El delito de cohecho regulado en el Código Penal de 1931 del 14 de agosto quedó redactado en el Libro Segundo, Título décimo “Delitos cometidos por funcionarios públicos”, Capítulo IV Cohecho, y a la letra dice:

*“Artículo 217: Comete el delito de cohecho: I. **La persona encargada de un servicio público**, que por sí o por interposta persona solicite o reciba indebidamente dinero o cualquier otra dádiva, o acepte una promesa **directa o indirectamente** para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto, relacionado con sus funciones, y II. El que **directa o indirectamente** dé u ofrezca dádivas a la persona encargada de un servicio público, sea o no funcionario, para que haga u omita un acto justo o injusto relacionado con sus funciones.*

*Artículo 218. El delito de cohecho se castigará con tres meses a **cinco años de prisión** y una **multa hasta de dos mil pesos**”³⁷.*

Llama mucho la atención que la nueva regulación del Capítulo del Cohecho quedó reducida a tan sólo dos artículos. Pero, como se señaló en los incisos c y g de las bases del Código Penal de 1931, contenidas en las Actas de la Secretaría de la Comisión Redactora, el legislador

³⁶ Díaz-Aranda, Enrique. L, Lecciones de Derecho Penal para el nuevo sistema de justicia en México, UNAM e IIJ, México, 2014, p. 13. <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3805/7.pdf>; asimismo, García Ramírez, Sergio, “La academia mexicana de ciencias Penales y Criminalia. Medio siglo en el desarrollo del derecho Penal mexicano, una aproximación”, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2013, p. 765. <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3535/29.pdf>

³⁷ Código Penal mexicano, 14 de agosto de 1931. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpf/CPF_orig_14ago31_ima.pdf

las aplicó y como consecuencia, desapareció del catálogo de penalidades a la comisión del delito de cohecho: la destitución, inhabilitación como servidor público, la agravante por calidad del sujeto, al igual que la regulación de decomisar lo cohechado.

Al ser aplicados los fundamentos que sirvieron de bases generales para la redacción del Código penal, las penas para el delito de cohecho quedaron reducidas a multa y prisión. Pero, lo más grave, a nuestro parecer, es que con esta forma de regular el delito de cohecho, en lugar de proteger la administración pública, se dejó en total desamparo su buen funcionamiento (actividad legislativa, partidos políticos, hacienda pública, sector salud, sector educación, sector de comunicaciones y transportes, etc.), y sobre todo en el desamparo jurídico del funcionamiento de la administración de justicia, ya que un funcionario judicial, jurado, asesor, árbitro, arbitrador o perito, podían sobornar o ser sobornados y lucrar con la función que ejercían y continuar con su empleo, puesto que podían librarse de la pena correspondiente al delito de cohecho con el pago de las multas y fianza, porque la gravedad por causas de calidad del sujeto desapareció de la regulación del cohecho, así como la inhabilitación para ejercer la función pública y la regulación del decomiso. En consecuencia, esta no adecuada protección a la función pública, preparo el terreno para el caldo de cultivo de una red de corrupción imparable en los años siguientes y repercutiendo hasta nuestros días.

REFORMA DE FECHA 5 DE ENERO DE 1983

Pasaron 52 años desde la publicación del Có-

digo Penal de 1931, hasta la siguiente reforma al delito de cohecho.

El 5 de enero de 1983, en el Diario Oficial de la Federación, se publica el Decreto de Reformas al Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la República en materia del fuero federal, contemplando al delito de cohecho dentro del Capítulo X, de la siguiente manera:

Artículo 222: Comete el delito de cohecho: I. **El servidor público**, que por sí o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente **para sí o para otro**, dinero o cualquier otra dádiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto, relacionado con sus funciones, y II. El que **de manera espontánea** dé u ofrezca **dinero o cualquier otra dádiva a algunas de las personas que se mencionan en la fracción anterior, para que cualquier servidor público** haga u omita un acto **justo o injusto** relacionado con sus funciones.

Al que comete el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones: Cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, o no sea evaluable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, promesa o prestación exceda de quinientas veces

el salario mínimo diario vigente en el Distrito federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos años a catorce años de prisión, multa trescientas a quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos años a catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dádivas entregadas, las mismas se aplicarán en beneficio del Estado³⁸.

Comparando este texto con el anterior, identificamos que agregaron la penalidad de destitución e inhabilitación del empleo, pero con menor duración que la establecida en el Código Penal de 1929, que era permanente, además agrega unos pequeños conceptos, por ejemplo, que en caso de ser el servidor público el sujeto que inicia la acción corrupta sea para sí o para otro el beneficio ya sea en dinero o en especie, y también en la segunda fracción se agrega la expresión “de manera espontánea” dar u ofrecer el dinero que pudiera ejercer un particular con el objeto de que un servidor público haga u omita un acto justo o injusto en relación con sus funciones.

Cabe señalar que a nivel mundial y posterior a la reforma anterior, se crearon tres Convenciones Internacionales Anticorrupción, en donde México forma parte, estos son: La Convención Interamericana contra la Corrupción de la Or-

ganización de los Estados Americanos (OEA), firmada el 26 de marzo de 1996, el cual entró en vigor el 1 de julio de 1997; la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), firmada el 17 de diciembre de 1997, la cual entró en vigor el 26 de julio de 1999; y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, firmada el 9 de diciembre de 2003, en Mérida, Yucatán, entrando en vigor el 14 de diciembre de 2005, conocida también como Convención de Mérida.

Estos instrumentos jurídicos internacionales contienen disposiciones para que los Estados Parte tipifiquen como delito tanto el cohecho doméstico como el cohecho internacional en sus legislaciones nacionales. Por lo tanto, fue necesario realizar una revisión de la tipificación del delito de cohecho establecido en el Código penal mexicano, a la luz de los anteriores estándares internacionalmente establecidos, donde se llegaron a varias e importantes conclusiones y entre estas la recomendación de la OCDE, respecto a la creación de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones públicas.

Esa ley entró en vigor en el año 2006, siendo uno de los más importantes logros en el marco de las Convenciones Internacionales en contra de la corrupción; dicha ley establece las sanciones que deben imponerse a personas físicas o morales, de nacionalidad mexicana o extranjera, por posibles infracciones en que incurran, con motivo de su participación en las contrataciones públicas de carácter federal, asimismo, prevé sanciones para personas físicas o morales de nacionalidad mexicana

³⁸ Diario Oficial de la Federación, Reforma 45 del Código Penal Federal, 1983, p. 6. http://www.diputados.gob.mx/Leyes-Biblio/ref/cpf/CPF_ref45_05ene83_ima.pdf

y por infracciones cometidas al participar en transacciones comerciales internacionales.

REFORMA DE FECHA 12 DE MARZO DE 2015

Debido a los compromisos internacionales, y a las recomendaciones de las comisiones revisoras de los Convenios en materia de anticorrupción, se estableció que era necesario realizar una reforma a la redacción de la figura del delito de cohecho, por tal motivo fue que en el Diario Oficial de la Federación, **el día 12 de marzo de 2015**, se publica el decreto de reforma al Libro Segundo, Título décimo de los “Delitos cometidos por funcionarios públicos, del Capítulo X, artículo 222 del código penal federal para quedar como sigue:

“Artículo 222. Cometén el delito de cohecho: I. El servidor público que por sí, o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquiera otra dádiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de **realizar un acto** relacionado con sus funciones **inherentes a su empleo, cargo o comisión**, y II. El que de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a alguna de las personas que se mencionan en la fracción anterior, para que cualquier servidor público haga u omita un **acto** relacionado con sus funciones, **a su empleo, cargo o comisión**.

Artículo 222 Bis.... I. A un servidor público extranjero, en su beneficio o el de un tercero, para que dicho servidor público gestione o se abstenga de gestionar la tramitación o resolución de asuntos relacionados con las

funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión; II. A un servidor público extranjero, en su beneficio o el de un tercero, para que dicho servidor público gestione la tramitación o resolución de cualquier asunto que se encuentre fuera del ámbito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión, o III. ”³⁹.

La modificación que sufre este artículo consiste en la supresión de los términos “justo” e “injusto”, pues de mantenerlos se calificarían las conductas relacionadas con el cohecho, lo que daba cabida a juicios de valor, dificultando la acreditación del tipo penal en comento. Pero al suprimir los términos “justo” e “injusto”, únicamente serán sancionados los actos relacionados con las funciones del servidor público como agente del delito, sin imponer ninguna calificación a la conducta en cuestión. Lo anterior, debido a que en materia penal subsiste el principio de legalidad: no debe imponerse por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada o una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. De ahí que en el caso concreto se pretenda evitar todos aquellos actos cuyo origen proviene de motivaciones ajenas al adecuado desempeño de la función pública y, al mismo tiempo, se impida que la valoración del contenido de la actuación del servidor público influya en la configuración del tipo⁴⁰.

³⁹ Diario Oficial de la Federación, Decreto por el que se reforman los artículos 222 y 222 bis del Código Penal Federal, 12 de marzo de 2015. https://www.dof.gob.mx/index_111.php?year=2015&month=03&day=12

⁴⁰ Gaceta Parlamentaria, Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 222 y 222 Bis del Código Penal Federal, Cámara de Diputados, 4 de marzo de 2014, p. 2. http://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/prog_leg/228_DO-

En cuanto al artículo 222 Bis, presenta un nuevo planteamiento y hace referencia al cohecho a servidores públicos extranjeros, donde únicamente se constriñe a la persona que ofrece, promete o da, por sí o por interpósita persona, dinero o cualquier otra dádiva, en bienes o servicios a favor de quien tenga la calidad de servidor público extranjero para obtener de éste ventajas indebidamente en el desarrollo o conducción de transacciones comerciales internacionales⁴¹.

Y en relación a las penas aplicadas por la comisión del delito de cohecho, no hay modificación alguna, quedando como lo que se establecía en la anterior reforma, siendo la pena más grave la de inhabilitación para ejercer la función pública por 14 años más prisión y multa.

REFORMA DEL 18 DE JULIO DE 2016, CONTEMPLA EL ACTUAL DELITO DE CO- HECHO EN EL ARTÍCULO 222 DE CÓDIGO PENAL FEDERAL MEXICANO

Posteriormente, siguió la reforma al Código Penal publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 18 de julio del 2016, quedando las partes modificadas como sigue: Título Décimo “Delitos por hechos de corrupción”, Capítulo X del Cohecho:

“Artículo 222: ... I. El servidor público que por sí, o por interpósita persona solicite o

reciba ilícitamente para sí o para otro, dinero o cualquier beneficio, o acepte una promesa, para hacer o dejar de realizar un acto propio de sus funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión; II. El que dé, prometa o entregue cualquier beneficio a alguna de las personas que se mencionan en el artículo 212 de este Código, para que haga u omita un acto relacionado con sus funciones, a su empleo, cargo o comisión, y III. El legislador federal que, en el ejercicio de sus funciones o atribuciones, y en el marco del proceso de aprobación del presupuesto de egresos respectivo, gestione o solicite: a) La asignación de recursos a favor de un ente público, exigiendo u obteniendo, para sí o para un tercero, una comisión, dádiva o contraprestación, en dinero o en especie, distinta a la que le corresponde por el ejercicio de su encargo; b) El otorgamiento de contratos de obra pública o de servicios a favor de determinadas personas físicas o morales. Se aplicará la misma pena a cualquier persona que gestione, solicite a nombre o en representación del legislador federal las asignaciones de recursos u otorgamiento de contratos a que se refieren los incisos a) y b) de este artículo.

...

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, de los bienes o la promesa no excedan del equivalente de quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión y de treinta a cien días multa.

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva

F_12mar15.pdf

⁴¹ Orozco Torres, Axel Francisco, Vademécum de Derecho Penal Mexicano, Tirant Lo Blanch, México, 2017, p. 46. <https://editorial.tirant.com/mex/libro/vademecum-de-derecho-penal-mexicano-axel-francisco-orozco-torres-9788491437475>

va, los bienes, promesa o prestación exceda de quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos a catorce años de prisión, y de cien a ciento cincuenta días multa”⁴².

En la presente tipificación se reforma la denominación del título décimo (Iniciativa con proyecto de decreto que deroga el título décimo y agrega el título vigésimo séptimo del código penal federal, 12 de abril de 2016) debido a que el legislador consideró necesario ser más específico y estar en coordinación con el Sistema Nacional Anticorrupción, que se estableció en la reforma a la Constitución, publicada en el año 2015, en materia de combate a la corrupción y conforme a lo establecido por el Senado de la República en la LXIII Legislatura sobre el dictamen de las comisiones unidas de justicia y de estudios legislativos, donde se convino reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Penal Federal en materia de combate a la corrupción. (Reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 27 de mayo de 2015, p. 6); y conforme a las convenciones internacionales de las que México forma parte, como son la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos, y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

⁴² Diario Oficial de la Federación, Reforma al Código penal Federal en Materia de Combate a la Corrupción, Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, 2016, p. 6. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5445043&fecha=18/07/2016

Además, se plantean tres situaciones, en la fracción I se hace referencia al servidor público que recibe o solicita por sí o por interpósita persona, para sí o para un tercero, cualquier tipo de beneficio o inclusive la promesa para hacer o dejar de hacer un acto que corresponda a su desempeño público, en este supuesto se requiere la participación de dos personas, sin importar si el particular accede a las peticiones del servidor público; en la fracción II, se hace referencia a alguien que da, promete o entrega el beneficio con la intención de que se haga o se deje de hacer el acto que corresponde al servidor público⁴³.

En cuanto a la fracción III, por la preocupación expresada en múltiples sectores de la sociedad mexicana en torno a posibles malas prácticas de legisladores federales en el proceso de aprobación del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el legislador estimó necesario garantizar la imparcialidad que debe prevalecer en el diseño de tal instrumento mediante la inhibición de aquellas conductas que tengan por finalidad obtener beneficios ilícitos. Por esta razón, el legislador agregó la fracción III para establecer como delito el que un legislador federal, en el ejercicio de sus funciones o atribuciones, y en el marco del proceso de aprobación del presupuesto de egresos respectivo, gestione o solicite la asignación de recursos a favor de un ente público, exigiendo u obteniendo, para sí o para un tercero, una comisión, dádiva o contraprestación, en dinero o en especie, distinta a la que le corresponde por el ejercicio de su encargo; o bien, el otorgamiento de contratos de obra pública o de ser-

⁴³ Orozco Torres, Axel Francisco, *Vademécum...* op.cit., 42, p. 45.

vicios a favor de determinadas personas, sean físicas o morales. Y para cubrir los diversos aspectos de tal conducta, se estimó conducente señalar que también se aplicarían las mismas penas, a cualquier persona que gestione o solicite a nombre o en representación del legislador federal, las asignaciones de recursos por otorgamiento de los contratos referidos en dicha fracción⁴⁴.

En el Capítulo I, art. 212, se explica lo que se debe entender por servidor público, el cual a la letra dice:

“... es servidor público toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal centralizada o en la del Distrito Federal, organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, organizaciones y sociedades asimiladas a éstas, fideicomisos públicos, empresas productivas del Estado, en los órganos constitucionales autónomos, en el Congreso de la Unión, o en el Poder Judicial Federal, o que manejen recursos económicos federales. Las disposiciones contenidas en el presente Título, son aplicables a los Gobernadores de los Estados, a los Diputados, a las Legislaturas Locales y a los Magistrados de los Tribunales de

Justicia Locales, por la comisión de los delitos previstos en este Título, en materia federal”⁴⁵.

Asimismo, en dicho artículo se establece como pena adicional a la correspondiente del cohecho la destitución y la inhabilitación para desempeñarse en la administración Pública por un plazo máximo de 20 años. Y más adelante continúa con las agravantes del delito de cohecho en razón de la calidad del sujeto que delinque; y en el artículo 213 se establece el procedimiento para la individualización de la pena.

Como hemos podido ver la regulación jurídica del delito de cohecho a través del tiempo, y en base a lo analizado concluimos que el derecho penal azteca se aplicaba con excesiva severidad, pues se castigaba con la muerte al juez que recibía soborno.

Después, durante la época colonial, la mayoría de las leyes provenían de España y su legislación era muy detallada respecto a la regulación de la conducta de quienes trabajaban en el servicio público, si cometían cohecho los segregaban y los inhabilitaban perpetuamente del servicio público. Las penas más graves consistían en la inhabilitación para ejercer funciones de servidor público, además de prisión y multas.

En México independiente, fue riguroso dictar un código penal federal a la altura de las necesidades de la sociedad, éstos fueron tres, el de 1871, el de 1929 y el de 1931, y en éste último

⁴⁴ Senado de la República, Dictamen de las comisiones unidas de justicia y de estudios legislativos, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del código penal federal en materia de combate a la corrupción, LXIII Legislatura, 14 de julio de 2016, pp.74-75. https://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia/reu/docs/dictamen_140616_1.pdf

⁴⁵ Diario Oficial de la Federación, Reforma al...op. cit., 43.

han realizado tres reformas en atención al delito de cohecho.

Lo más sobresaliente de la historia de la legislación del delito de cohecho en México, es que la penalidad la han ido reduciendo, con los aztecas la pena era la muerte, en la Nueva España, y en los Códigos de 1871 y 1929, la pena más grave era la inhabilitación permanente en el servicio público, pero en el Código de 1931, debido a la ideología con la que se basaron para redactar el código, decidieron simplificar muchos aspectos entre ellas las sanciones, por ejemplo en el caso del delito de cohecho, eliminaron las circunstancias agravantes por calidad del sujeto, quitaron la regulación de decomisar lo cohechado y la penalidad se redujo significativamente, tanto que su penalidad máxima sólo consistía en prisión y multa, desapareciendo la penalidad de destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos y así permaneció la regulación al delito de cohecho durante 52 años. Además, llama la atención que los redactores de este código, eran expertos en materia penal y todos eran funcionarios públicos de altos mandos, tales como: ministros de la Suprema Corte de Justicia, magistrados, jueces federales y estatales, entre otros.

Después, el 5 de enero de 1983, se publica una reforma al Código penal federal, en dicha reforma se establece como pena máxima por la comisión de este delito, prisión de 14 años, multa y destitución e inhabilitación por 14 años en la administración pública; regulan el decomiso de lo cohechado y la individualización de la pena es en base a la calidad del sujeto.

Posteriormente, y en base a los compromisos internacionales en materia de anticorrupción, el

12 de marzo de 2015, se publica otra reforma al delito de cohecho, donde la modificación es la creación de la figura del cohecho de servidores públicos extranjeros.

En la última reforma al delito de cohecho, la de fecha 18 de julio de 2016, se modifica el nombre del título décimo, lugar en donde se encuentra ubicada la regulación del delito de cohecho, quedando como “Delitos por hechos de corrupción”; y en el artículo 212 se aumenta la duración de inhabilitación para ejercer servicio público como máximo 20 años, a los servidores que cometan cohecho.

CONCLUSIONES

En este trabajo, hemos podido ver la regulación jurídica del delito de cohecho a través del tiempo, y de lo analizado concluimos que el derecho penal azteca se aplicaba con excesiva severidad, pues se castigaba con la muerte al juez que recibía soborno.

Después, durante la época colonial, la mayoría de las leyes provenían de España y su legislación era muy detallada respecto a la regulación de la conducta de quienes trabajaban en el servicio público, si cometían cohecho los segregaban y los inhabilitaban perpetuamente del servicio público. Las penas más graves consistían en la inhabilitación para ejercer funciones de servidor público, además de prisión y multas.

En la época de México independiente, fue riguroso dictar un código penal federal a la altura de las necesidades de la sociedad, éstos fueron tres, el de 1871, el de 1929 y el de 1931, y en éste último se han realizado tres reformas en atención al delito de cohecho.

Lo más sobresaliente de la historia de la legislación del delito de cohecho en México, es que la penalidad la han ido reduciendo; con los aztecas la pena era la muerte, en la Nueva España, y en los Códigos de 1871 y 1929, la pena más grave era la inhabilitación permanente en el servicio público; pero en el Código de 1931, debido a la ideología con la que se basaron para redactar el código, decidieron simplificar muchos aspectos entre ellas las sanciones, por ejemplo en el caso del delito de cohecho, eliminaron las circunstancias agravantes por calidad del sujeto, quitaron la regulación de decomisar lo cohechado y la penalidad se redujo significativamente, tanto que su penalidad máxima sólo consistía en prisión y multa, desapareciendo la penalidad de destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos y lo peor de esto es que esta regulación permaneció sin cambios durante 52 años; esto permitió el paso a la construcción de una red de corrupción. También, llama la atención que los redactores de este código fueron designados por el presidente de la República de esa época, porque eran expertos en materia penal, y además todos eran funcionarios públicos de altos mandos, tales como: ministros de la Suprema Corte de Justicia, magistrados, jueces federales y estatales, entre otros, es decir, los redactores no eran personas ordinarias. Como consecuencia a la regulación del referido delito de cohecho, se sembró una excelente coartada para la producción de un caldo de cultivo de corrupción desmedida y sin precedentes.

Después, el 5 de enero de 1983, se publica una reforma al Código penal federal, en la que se establece como pena máxima por la comisión de este delito, prisión hasta por 14 años, multa y destitución e inhabilitación hasta por 14 años

en la administración pública; regulan el decomiso de lo cohechado y la individualización de la pena es en base a la calidad del sujeto.

Posteriormente, y en base a los compromisos internacionales en materia de anticorrupción, el 12 de marzo de 2015, se publica otra reforma al delito de cohecho, donde la modificación es la creación de la figura del cohecho de servidores públicos extranjeros.

En la última reforma al delito de cohecho, la de fecha 18 de julio de 2016, se modifica el nombre del título décimo, lugar en donde se encuentra ubicada la regulación del delito de cohecho, quedando como “Delitos por hechos de corrupción”; y en el artículo 212 se aumenta la duración de inhabilitación para ejercer servicio público como máximo 20 años, a los servidores que cometan cohecho.

En general, no hemos tenido una adecuada regulación del delito de cohecho, que permita repeler las conductas no adecuadas de los servidores públicos, en razón del daño al buen funcionamiento de la Administración pública. Y en lo personal consideramos que con base en las consecuencias devastadoras de la corrupción en nuestro país, la penalidad máxima por la comisión de cohecho debería ser entre otras, la inhabilitación permanente para desempeñarse dentro de la Administración Pública.

BIBLIOGRAFÍA

ALVA IXTLILXOCHITL, Fernando De, *Historia Chichimeca*, s.e., México, 1892, t II. http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/obras-historicas-de-don-fernando-de-alva-ixtlilxochitl-tomo-2/html/588554a4-a415-11e1-b1fb-00163ebf5e63_189.html

- BARANDA, Joaquín, "Memoria que en cumplimiento del precepto constitucional presenta al Congreso de la Unión el C. Lic. Joaquín Baranda Secretario de Estado y del despacho de Justicia e Instrucción Pública (1887, 31 de marzo)", en: SOBERANES FERNÁNDEZ, José Luis, *Memorias de la Secretaría de Justicia*, UNAM, 1997. <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:T-LXXt9s52qQJ:https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/2/546/1.pdf+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=kr>
- BOLETÍN OFICIAL, *Novísima Recopilación*, Mandada formar por el señor Don Carlos IV, Madrid, 1805. https://www.boe.es/biblioteca_juridica/publicacion.php?id=PUB-LH-1993-63&tipo=L&modo=2
- CARRANCÁ Y TRUJILLO, Raúl, *Martínez de Castro y el Código Penal de 1871*, Escuela Nacional de Jurisprudencia, s.l.i., 1942.
- CASTELLANOS, Fernando, *Lineamientos elementales de Derecho Penal*, Editorial Porrúa, México, 2004.
- CONGRESO DE LA UNIÓN, *Código de Procedimientos Penales del Distrito y Territorios Federales*, Edición del Boletín Judicial, Imprenta y Litografía de Francisco Díaz de León, Sucesores, S.A., México, 894, 3 de junio.
- Congreso de la Unión, *Código Federal de Procedimientos Penales*, Edición Oficial, Imprenta de Antonio Enríquez, s.l.i., 1908.
- CRUZ BARNEY, Óscar. "Influencias del código penal de Martínez de Castro en la codificación penal mexicana, Reforma judicial", *Revista mexicana de justicia*, s.f., número 17, pp. 99-128. <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:HRCgzeeTT9wJ:https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/reforma-judicial/article/download/8789/10840+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=kr>
- CUENCA DARDÓN, Carlos E., *Manual de Derecho Procesal penal*, Porrúa, México, 2015.
- DE ACOSTA, Joseph, *Historia natural y moral de las Indias, en que se tratan las cosas notables del cielo, y elementos, metales, plantas y animales, de ellas: los ritos, ceremonias, leyes y gobiernos y guerras de los indios*. Imperio de Sevilla, en casa de Juan de León. Impreso en Sevilla en la casa de Juan de León, 1590. [https://books.google.co.kr/books?id=Pw5TAAACAAJ&printsec=frontcover&dq=De+Acosta,+Joseph.+\(1590\).+Historia+natural+y+moral+de+las+Indias,&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwi6jIX5h8_rAhVEM94KHUVSD-moQ_6AEwAHoECAAAQAg#v=onepage&q=De%20Acosta%2C%20Joseph.%20\(1590\).%20Historia%20natural%20y%20moral%20de%20las%20Indias%2C&f=false](https://books.google.co.kr/books?id=Pw5TAAACAAJ&printsec=frontcover&dq=De+Acosta,+Joseph.+(1590).+Historia+natural+y+moral+de+las+Indias,&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwi6jIX5h8_rAhVEM94KHUVSD-moQ_6AEwAHoECAAAQAg#v=onepage&q=De%20Acosta%2C%20Joseph.%20(1590).%20Historia%20natural%20y%20moral%20de%20las%20Indias%2C&f=false)
- DIARIO OFICIAL, *Código Penal para el Distrito y Territorios Federales*, Órgano de Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Secretaría de Gobernación, México, D.F., 1929, 5 de octubre, Sección Tercera, Poder Ejecutivo. https://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?cod_diario=186990&pagina=1&seccion=3
- DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, *Reforma 45 del Código Penal Federal*, 5 de enero de 1983, p. 6. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpf/CPF_ref45_05e-ne83_ima.pdf
- DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, *Decreto por el que se reforman los artículos 222 y 222 bis del Código Penal Federal*, 12 de marzo de 2015. https://www.dof.gob.mx/index_111.php?year=2015&month=03&day=12
- DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, *Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción*, Senado de la República, 27 de mayo de 2015, LXIII Legislatura. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5394003&fecha=27/05/2015
- DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, *Reforma al Código penal Federal en Materia de Combate a la Corrupción*. Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, Art. 222, 18 de julio de 2016. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5445043&fecha=18/07/2016
- DÍAZ-ARANDA, Enrique. L., *Lecciones de Derecho Penal para el nuevo sistema de justicia en México*, UNAM e IIJ, México, 2014. <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3805/7.pdf>
- EDICIÓN DEL BOLETÍN JUDICIAL, *Código de Procedimien-*

- tos Penales del Distrito y Territorios Federales, Imprenta y Litografía, México, 1894.
- EDICIÓN OFICIAL, *Código Federal de Procedimientos Penales*, Imprenta de Antonio Enríquez, México, 1908.
- EDITOR MIRAMONTES, Donato. "Exposición de motivos del Código Penal de 1871", en: *Código Penal para el Distrito Federal y el Territorio de la Baja California sobre delitos del Fuero común y para toda la República Mexicana sobre delitos contra la Federación*, original publicado en 1871, 1883. <http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1020013105/1020013105.pdf>
- GACETA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, *Iniciativa con proyecto de decreto que deroga el título décimo y agrega el título vigésimo séptimo del código penal federal*, 12 de abril del 2016. https://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia/reu/docs/dictamen_140616_1.pdf
- GACETA PARLAMENTARIA, *Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 222 y 222 Bis del Código Penal Federal*, Cámara de Diputados, 4 de marzo de 2014. http://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/prog_leg/228_DO_12mar15.pdf
- GARCÍA RAMÍREZ, Sergio. "La academia mexicana de ciencias Penales y Criminalia. Medio siglo en el desarrollo del derecho Penal mexicano, una aproximación", *Instituto de Investigaciones Jurídicas*, 2013, p. 759-802. <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3535/29.pdf>
- HERMANN, Trimborn. "El derecho penal en las altas culturas de la América precolombina". *Boletín de la academia de la Historia*, s.f., pp. 739-782. <http://www.cervantesvirtual.com/obra/el-derecho-penal-en-las-altas-culturas-de-la-america-precolombina/>
- INDICADOR POLÍTICO, "Breve historia de la codificación penal en México", 11 de noviembre de 2011. <http://www.indicadorpolitico.mx/?p=4595>
- LABATUT, Glenda, *Derecho penal*, Ed. Jurídica de Chile, Santiago, 2000, t II, 7ª edición.
- NAVA GARCÉS, Alberto Enrique, *200 años de justicia penal en México, primera parte, 1810-1910, Primeras leyes penales*. UNAM, México, 2019. <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4074/12.pdf>
- OBREGÓN, Esquivel, *Apuntes para la Historia del Derecho en México*, Edición polis, 1937, t I. <http://biblio.upmx.mx/library/index.php/7487>
- OROZCO TORRES, Axel Francisco, *Vademécum de Derecho Penal Mexicano*, Tirant Lo Blanch, México, 2017. <https://editorial.tirant.com/mex/libro/vademecum-de-derecho-penal-mexicano-axel-francisco-orozco-torres-9788491437475>
- OROZCO Y BERRA, Manuel, *Historia antigua de la conquista de México*, Tipografía de Gonzalo A. Esteva, México, 1880, t I. <http://www.cervantesvirtual.com/obra/historia-antigua-y-de-la-conquista-de-mexico-tomo-primer-846972/>
- PORTE PETIT CANDAUDAP, Celestino, *Apuntamientos de la parte general de derecho penal I*, Porrúa, México, 1989, 20a. ed.
- COHECHO, ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL DELITO DE. SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN; Quinta Época; Primera Sala; Tomo CXXVIII, p. 449.
- SENADO DE LA REPÚBLICA, *Dictamen de las comisiones unidas de justicia y de estudios legislativos, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del código penal federal en materia de combate a la corrupción*. 14 de julio de 2016, LXIII Legislatura, pp.74-47. https://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia/reu/docs/dictamen_140616_1.pdf
- SPECKMAN GUERRA, Elisa. *La justicia penal en el siglo XIX y las primeras décadas del XX. Los Legisladores y sus propuestas*. Instituto de Investigaciones Jurídicas e Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, 2013. <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3535/18.pdf>
- TALLERES GRÁFICOS DE LA NACIÓN, *Código Penal mexicano*, 14 de agosto de 1931. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpf/CPF_orig_14ago31_ima.pdf
- TRINBORN, Herman, *El delito de las altas culturas de América*. Universidad Mayor de San Marcos, Perú, 1968, trad. del Alemán al Español, por José León Herrera y Ernesto More. <https://catalog.hathitrust.org/Record/000600577>
- VEYTIA, Mariano. *Historia antigua de México*. Imprenta a cargo de Juan Ojeda, México, 1836, Tomo III. https://archive.org/details/historiaantiguad00veyt_0/page/422/mode/2up